

GASTO PÚBLICO Y DESIGUALDAD SOCIAL
Germà Bel
(Artículo publicado en *La Vanguardia*, 22 de abril de 2014)

La semana pasada Manuel Valls, nuevo primer ministro francés, concretó el recorte de gasto público de 50.000 millones € que el presidente Hollande había anticipado tres meses atrás. Argumentaba Valls: “Le debemos la verdad a los franceses, no es Europa la que nos impone sus elecciones, pero nuestro gasto público supone el 57% del PIB...No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades y debemos romper esa lógica de la deuda que nos tiene atados de manos”. Me parece digno de elogio. Primero, porque rehuyó el populismo de responsabilizar a la UE por medidas impopulares, al que tantos han recurrido. Segundo, porque plantea un problema al que la sociedad francesa debería haber sido expuesta hace tiempo, bastante antes de llegar a un gasto público del 57% del PIB y una deuda pública del 93% del PIB.

El recorte del gasto en Francia plantea preocupaciones comprensibles por sus potenciales efectos sobre la desigualdad social. Pero procede evitar asociaciones simples entre gasto público y desigualdad. Guntram Wolff publicó en 2013 la nota *Inequality and adjustment in Europe*, en que comparaba la evolución de la desigualdad social en la Eurozona entre 2007 y 2011. Francia y España eran los dos países en que más había aumentado la desigualdad, mientras que ésta se había reducido en Alemania y Holanda. Esto a pesar de que el gasto público había crecido igual o más en Francia y España. La comparación entre Francia y Alemania es muy ilustrativa: Aunque el gasto público francés supera al alemán en más de 10 puntos del PIB, la desigualdad en 2011 era notablemente menor en Alemania.

El primer factor para entender tales discrepancias se halla en el nivel y evolución del desempleo, principal agente de desigualdad. También podría ejercer gran influencia la forma en que se distribuye el gasto público, a quienes beneficia en mayor medida. En tal sentido, recuerdo un momento estelar de la última campaña presidencial en EEUU, cuando el candidato republicano Romney fue grabado (y difundido) afirmando que los beneficiarios de subsidios federales, el 47% de los estadounidenses, eran electores naturales de Obama. Más allá de su elitismo, lo más chocante es que ignoraba que los estados con más subsidios federales por habitante son estados tradicionalmente republicanos. Esto es así por la gran concentración de subsidios en gastos de pensionistas y en la agricultura, mucho más cuantiosos que los subsidios de *bienestar*, que son los dirigidos a la población en peor situación económica.

¿A quién beneficia el gasto público? Necesitamos respuesta para esta pregunta antes de emitir juicios tajantes sobre el gasto y la desigualdad. Por cierto, esto me recuerda que en los últimos cinco años los ajustes en el empleo público en España han reducido las nóminas en un 10% en las CCAA, pero en menos del 1% en el gobierno central. Las CCAA gestionan los servicios públicos con mayor impacto en la cohesión social, como la educación y la sanidad, así que se hace fácil deducir qué efectos tienen sobre la desigualdad estas prioridades en los ajustes.